

ACORD.12/67
ACORD.DEL 20/12I/67 C.S.J.N.
REGLAMENTACION DE LOS ARTS. 35, 117, 120, 457 Y 648
DEL C.P.C.C.N.

1) El importe de las multas que no tuvieran un destino especial establecido en el Código será aplicado a la dotación de las bibliotecas de los tribunales nacionales.

En la Capital Federal el depósito se efectuará en la cuenta N° 289/1, “Corte Suprema de Justicia, arts. 8/10, ley 17.116”, abierta en la Casa Central del Banco Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, agregándose al expediente un ejemplar de la boleta.

En las provincias y en el Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, [hoy: Provincia], el depósito se hará en una agencia del Banco de la Nación Argentina, a la orden del tribunal que impuso la multa, el que transferirá su importe a la cuenta mencionada en el párrafo anterior haciéndolo saber a la Corte Suprema.

Corresponderá a los representantes del ministerio público fiscal ante las respectivas jurisdicciones promover la ejecución de las multas.

2) El secretario o el oficial 1° pondrán cargo a las peticiones a que se refiere el art. 117 del Código, o las suscribirán junto con el solicitante.

3) En el cargo de los escritos a que se refiere el art. 120 se indicará el número de copias que se acompañen. Dichas copias deberán conservarse en Secretaría durante dos meses. [Agregado por acord. del 16/IV/1974). Las copias de los escritos de demanda, excepciones, reconvención y contestación de aquéllas y de los documentos que las acompañen, deberán ser incorporadas a los autos para ser agregadas a la cédula que corresponde o ser, en su caso, entregadas al interesado, en cuya oportunidad se procederá al desglose dejando constancia en autos en debida forma.

4) Exceptúase de la obligación de comparecer a prestar declaración testimonial a las siguientes personas: Presidente y vicepresidente de la Nación; ministros y secretarios del Poder Ejecutivo; subsecretarios de los ministerios y secretarías de Estado; gobernadores de las provincias y del Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (hoy: Provincia); ministros y secretarios del Poder Ejecutivo de las provincias y del territorio antes mencionado; legisladores nacionales y provinciales,

magistrados de la justicia nacional y provincial y funcionarios judiciales asimilados a esa calidad; obispos y prelados; el procurador del Tesoro; fiscales de Estado; intendentes municipales; presidente de los consejos deliberantes y secretarios del departamento ejecutivo de las municipalidades; oficiales superiores de las Fuerzas Armadas; embajadores, ministros plenipotenciarios y cónsules generales; rectores y decanos de universidades nacionales; presidentes de bancos oficiales, nacionales y provinciales; presidentes, administradores, directores, gerentes o titulares de cargos equivalentes que importen la representación legal de entidades autárquicas y empresas del Estado, nacionales y provinciales; jefes y subjefes de la Policía Federal y de las provincias; directores de Institutos Penales de la Nación y de las provincias; jefes de reparticiones de la administración pública, nacional, provincial y comunal que, en atención al buen servicio de la función que desempeñan no deban, a juicio del juez y según las circunstancias del caso, comparecer personalmente a declarar como testigos.

5) En los supuestos a que se refiere el art. 684, inc. 2, el oficial de justicia deberá ajustar su cometido, al practicar el inventario, a lo que dispone el art. 43 de las “Instrucciones al Personal de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones” de fecha 28/II/1949. En cuanto al embargo que esa misma norma dispone, se observará lo establecido en el art. 219 del Código y se designará depositario preferentemente al síndico, o a la persona que éste indique, salvo lo que el juez dispusiere al respecto.